

Copiapó, veinte de enero de dos mil veintiséis.

VISTO, OIDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Individualización de la audiencia. Que el trece de enero de dos mil veintiséis, en causa RUC N° 2500604542-4, **RIT N° 184-2025**, ante la Tercera Sala de este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, integrada por los jueces señores Marcelo Martínez Venegas, quien la presidio, Mauricio Pizarro Díaz y Adrián Reyes Pardo, se llevó a efecto juicio oral donde se conoció de la acusación fiscal, sostenida por el Fiscal Marcelo Torres Rossel, en contra de **JOHN HAROLD GODOY VALENCIA**, cédula de identidad N° 14.961.681-0, colombiano, nacido en Tumaco Nariño, Colombia, el 21 de junio de 2001, casado, sin profesión u oficio, con domicilio en Jacinto Prato N° 144, Copiapó, representado legalmente por el abogado defensor de la defensoría penal pública Sebastián Olivero Rodríguez.

SEGUNDO: Acusación. Que el Ministerio Público fundó la acusación fiscal señalando como hechos de la misma lo siguiente:

“Hecho 1: El día 29 de abril de 2025, alrededor de las 14:40 horas aproximadamente, en las inmediaciones de la calle Gabriel Marco Ivanne en la ciudad de Copiapo, el acusado JOHN GODOY VALENCIA abordó a la víctima MARIA ÑANCUMIL VERA , extrayendo desde sus vestimentas un arma blanca tipo cuchillo, con la cual el acusado intimidó a ÑANCUMIL VERA amenazándola con apuñalarla si ésta no le entregaba su teléfono celular, tras lo cual el acusado le arrebató de sus manos a la víctima el celular marca Samsung, color rojo, avaluado en \$120.000, huyendo el acusado con la especie en su poder.

Hecho 2: El 1 de mayo de 2025, alrededor de las 19 :00 horas, en una plazoleta ubicada en el sector Colonias Extranjeras, en la comuna de Copiapo, el acusado JOHN GODOY VALENCIA abordó a la víctima CARLOS ÑANCUMIL ÑANCUMIL, a quien el acusado lo tomó en forma brusca de sus vestimentas, solicitándole la entrega de su bicicleta y celular, y ante la negativa de la víctima, el acusado extrajo desde sus vestimentas un arma blanca tipo cuchillo, con la cual intimidó a CARLOS ÑANCUMIL, amenazándolo con apuñalarlo si no le entregaba la bicicleta, por lo que la víctima accedió a dicha entrega ante el temor de ser agredido, logrando de



este modo el acusado sustraerle la bicicleta marca GT, color negro con gris, avaluada en la suma \$230.000, y huyendo del lugar con la especie en su poder. Días después de cometido ambos ilícitos, el 4 de mayo de 2025, el acusado Godoy Valencia fue sorprendido y detenido en la vía pública con las especies que les sustrajo a las víctimas en su poder (teléfono y bicicleta).”

En cuanto a la **calificación jurídica e iter criminis**, estima el persecutor penal que dichos hechos configuran dos delitos de robo con intimidación, previsto y sancionado en los artículos 433 y 436 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado; en los cuales le cabe **participación** en calidad de autor material conforme al artículo 15 N° 1 del Código Penal, sosteniendo que como **circunstancias modificatorias** de responsabilidad penal concurre la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal y no invoca agravantes, por lo que, de conformidad a las citas legales que invoca, solicita al Tribunal que se impongan dos **penas** de diez (10) años de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias del artículo 29 del Código Penal, comiso de los elementos utilizados para cometer el delito, el registro e incorporación de huella genética conforme a la Ley 19.970 y pago de las costas.

TERCERO: Alegatos de apertura. Que el **ministerio público** al inicio del juicio, en lo esencial, expuso que se demostraran los delitos de robo con intimidación por parte del acusado con la declaración de las víctima y de testigos presenciales. Indica que el acusado que cometía delitos en el sector por lo que las víctimas difundieron en redes sociales lo ocurrido por lo que es detenido el inculcado por vecinos que lo encuentran con las especies robadas. Si bien, los delitos no fueron denunciados el mismo día en que se cometieron, de todas maneras las víctimas recuperaron sus bienes días posteriores al asalto y declararan sobre los hechos en este juicio, por lo que la prueba será suficiente acreditar ambos delitos que se le atribuyen al acusado y por eso pide su condena.

En la misma etapa procesal la **defensa**, de manera resumida, indicó que solicita la absolución del acusado por vulneración a garantías fundamentales del acusado debido a que su detención se produjo sin estar en una hipótesis legal para verse privado de su libertad, su aprehensión la efectuaron civiles que no declaran en el juicio, no existe prueba sobre las



publicaciones en redes sociales aludidas por el ministerio público. Los civiles que lo detuvieron lo entregaron amarrado a una reja a las víctimas, en este caso no se está en una situación de flagrancia, no hay denuncia previa y el reconocimiento que se hace es sesgado, por lo que pide que la prueba se valore negativamente por habersele obtenido vulnerando garantías fundamentales pues proviene de diligencias ilegales y por ello solicita la absolución.

CUARTO: Declaración del acusado. Que estando el enjuiciado, en conocimiento de sus derechos y debidamente asistido por su defensa, renuncio a su derecho a guardar silencio y sucintamente señaló que el día de los hechos iba saliendo de su casa y lo detuvieron amarrándolo a una reja, pero no conoce a las personas que lo están acusando. Niega que le hayan encontrado una bicicleta y un celular, especies que eran reclamadas por las personas que llegaron, Carabineros le dijo que por esas especie lo detenían, pero él no andaba con esas especies. A su abogado le contó lo sucedido y cuando lo llevaron a declarar a la fiscalía él guardó silencio, aunque pensaba que estaba injustamente detenido. Indicó que los abusos que sufrió los cometieron las personas que lo detuvieron, eran unos vecinos extranjeros, pero la policía no cometió ningún abuso. Insistió en que nunca tuvo las especies en su poder, la bicicleta y el celular aparecieron después que lo detuvieron, esas especies se las pusieron las personas que lo detuvieron.

QUINTO: Convenciones probatorias y prueba rendida. Que, al no existir convenciones probatorias, durante el desarrollo del juicio el ministerio público aportó las probanzas que se analizan en los considerandos siguientes, mientras que la defensa no presentó pruebas propias e independientes.

SEXTO: Alegatos de clausura y réplica. Que en su exposición final el **ministerio público** alegó fundamentalmente que se acreditó la participación del acusado en dos delitos de robo con intimidación tal como lo declararon las víctimas y la testigo del primer hecho. Si bien, se trató de una detención ciudadana, Carabineros acudió prontamente y se trató de un procedimiento ajustado a derecho, donde se levantaron las actas de entrega de detenido por civiles, se reciben las especies que tenía en su poder el acusado, las cuales



fueron reconocidas y recuperadas por las víctimas. Aunque la defensa alega que le fueron puestas las especies al inculpado, las víctimas señalan que las especies las tenía éste. Los ofendidos explicaron los motivos por los cuales no hicieron las denuncias el mismo día en que les ocurrieron los hechos, pero de todas maneras se les dio aviso a los vecinos. Al no haber vulneración de derechos, la fiscalía insiste en el veredicto condenatorio. A su vez, en la exposición de cierre, la **defensa**, sucintamente, planteó que se cometieron vulneraciones a las garantías fundamentales del acusado transgrediéndose los artículos 5, 129 y 130 del Código Procesal Penal pues la entrega del detenido a Carabineros no la realizaron los aprehensores, sino que estos lo pusieron a disposición de otros civiles, no hay hipótesis de flagrancia. Agrega que durante el juicio se mencionó a una tercera familiar que habría avisado a los vecinos sobre los hechos y de la que nada dijeron durante la investigación, el inculpado fue previamente registrado por civiles y son quienes le dejan la bicicleta a un lado. Reitera que desde esa detención irregular surge la prueba presentada en juicio concretándose así lo que se conoce como teoría del fruto del árbol envenenado y que no hay antecedentes anteriores que vinculen a su defendido con los delitos por lo pide su absolución.

Posteriormente se otorgó la posibilidad de **réplica**, donde el *ministerio público* manifestó, en síntesis, que la flagrancia versaba sobre un delito de receptación y llama la atención sobre el hecho que el acusado se mantuvo silente durante toda la investigación a pesar de, según él, se inocente, que lo cargaron y se le mantuvo en prisión preventiva, sumado a que el reconocimiento más perfecto es el que se efectúa en juicio tal como lo realizaron las víctimas. A su vez, en la misma ocasión la *defensa* indicó que una persona amarrada no tiene dominio alguno sobre las especies, fueron otros los que revisaron sus pertenencias y por lo tanto hay duda razonable sobre quien posicionó las especies cerca del acusado, señala que la segunda víctima es incongruente en su declaración porque señala que el hecho ocurre el 01 de mayo después de haber asistido al colegio siendo que es un día feriado irrenunciable, que los reconocimientos son sesgados, hay vulneración



de derechos y que no puede serle perjudicial al acusado el ejercicio de su derecho a guardar silencio, por lo que pide la absolución.

SÉPTIMO: Análisis de la prueba rendida. Que, en lo pertinente, el ministerio público rindió como prueba testifical la declaración de **María Ñancumil Vera**, quien sucintamente indicó que el 29 de mayo (sic) de 2025, cuando iba a buscar a sus hijos al colegio en compañía de su hija Paz Manque, a eso de las 14.00 horas, pasó una persona por el lado de ellas que les dijo que no se preocuparan porque no era mala persona, después este sujeto se devolvió y le dijo que le entregara el celular o la apuñalaría, vestía un pantalón corto, una polera y un gorro, y extrajo un cuchillo del pantalón corto que vestía, así que ella le entregó el teléfono celular para que no le pasara nada a su hija, agrega que llevaba el teléfono en la mano porque recién había hablado por teléfono con su hermana y el sujeto le arrebató el teléfono, que era marca Samsung color rojo, y se fue murmurando, ella vio el cuchillo. Después de lo sucedido quedó atemorizada y no quería salir de su casa. refirió también que su hermana avisó de lo sucedido en el grupo de WhatsApp de los vecinos, así dieron con el joven que la asaltó, de lo que se enteró por el mismo WhatsApp, el 04 de mayo de 2025, que habían tomado al joven y habían encontrado su teléfono, por lo que bajó de la población a buscarlo, donde encontró a la persona que la asaltó y que reconoce en la sala de audiencias al inculpado como dicho sujeto, quien estaba con la misma ropa, pues vestía el mismo pantalón corto y polera, pero sin el gorro, y que al verla le dijo “mamita, yo no fui”, sin embargo, ella no tuvo dudas que la persona que le robó su celular era la misma que estaba ahí amarrada a una reja, también reconoció su celular y Carabineros llegó como a los 5 minutos. Agregó que este sujeto, días después de asaltarla a ella, también asaltó a su sobrino Carlos quitándole una bicicleta que ese día que lo detuvieron estaba también ahí, Carlos igualmente fue a buscar su bicicleta a ese lugar y dijo que era la misma persona que lo había asaltado la que estaba allí retenida. Durante su declaración se le exhibió parte del **set fotográfico** indicando que la fotografía 4 y 5 corresponden a su teléfono celular que le arrebataron y que pudo rescatar el día que detuvieron a quien la asaltó, lo que no denunció el día que eso ocurrió porque había dado por perdido el teléfono así que no



había hecho nada. Señaló que el aviso al grupo de WhatsApp lo hizo su hermana, lo que declaró en fiscalía, en verdad ratificó su declaración policial anterior en donde señala que el aviso se dio por WhatsApp, pero no indicó el nombre de su hermana. Agrega que el teléfono se lo devolvió un vecino que no conoce, que no vio al sujeto andando en la bicicleta de su sobrino ni con el celular cuando lo detuvieron, pero lo reconoce porque fue la persona que le robó el teléfono.

De forma muy similar declaró la testigo **Paz Manque Ñancumil**, quien en lo esencial refirió que el 29 de abril de 2025, a eso de las 14.40 horas, iba junto a su mamá María Ñancumil Vera al colegio a buscar a sus hermanos y llegando al Chañar, en calle Gabriel Manco Ivanne, pasó un chico que les dijo que no era malo, siguieron caminando y este sujeto se devolvió y le dijo a su mamá que le entregue el teléfono o si no la apuñala, su madre llevaba el teléfono en la mano y lo entregó, después la persona que reconoce en la sala de audiencias se fue murmurando y ellas tomaron un taxi desde donde llamaron a su tía Juana Ñancumil desde el su teléfono. Precisa que la persona le arrebató el teléfono a su mamá, andaba con un cuchillo que ella vio. Agregó que se les avisó a todos los vecinos por un grupo de WhatsApp y su madre recuperó el teléfono por unos vecinos que le avisaron a su tía, ahí su mamá bajo y un caballero le entregó el teléfono. Mencionó que la misma persona también asaltó a su primo Carlos Ñancumil, a quien le robo una bicicleta no sabe dónde. Explica que su tía aviso en el WhatsApp y que ellas, después de lo ocurrido, iban en el taxi porque su mamá estaba asustada y su mamá le pidió el teléfono a ella para avisarle a su tía lo ocurrido, pero refiere a la tía en la declaración prestada en PDI.

Por su parte, también declaró **Carlos Ñancumil Ñancumil**, quien en lo relevante señaló que un jueves que no precisa salió a andar en bicicleta a eso de las siete y tanto de la noche y cuando estaba sentado en el parque de las tomas de Colonias Extranjeras fue abordado por el acusado con quien estuvo conversando un rato, luego el sujeto sacó un cuchillo y lo amenazó diciéndole que le entregara la bicicleta, la billetera y el celular o si no usaría el cuchillo, forcejearon y ya cuando llegaron a un negocio el tipo huyo con la bicicleta, así que llamó a su mamá para contarle lo ocurrido y se fue a su casa. Al otro



día apareció la PDI y les tomaron declaración. Su bicicleta era negra con los aros pintados de color rojo y reconoce en la sala de audiencias al acusado como la persona que se la robó, que estuvieron hablando de la bicicleta, después el sujeto sacó el cuchillo y le pidió la bicicleta, lo agarró del chaleco y subieron dos escaleras, lo empezó a amenazar para que entregara la bicicleta o lo dañaría con el cuchillo, así que esta persona se llevó la bicicleta y él empezó a correr. Aunque no recuerda la fecha, indica que fue en mayo de 2025. Además, se enteró que había asaltado a su tía María Ñancumil días antes, que le había arrebatado el celular. Agrega que recuperó su bicicleta porque los vecinos avisaron al grupo de WhatsApp que tenían retenida a la persona que los asaltó, lo tenían amarrado unos extranjeros y estaba ahí la bicicleta que él reconoció y a su tía le devolvieron el celular, trajeron al sujeto y después trajeron la bicicleta, su tía había llegado antes al lugar. Su bicicleta la recupero en mayo de 2025, unos dos días después que lo asaltaron y la denuncia la hizo a Carabineros cuando recuperó su bicicleta, también le tomaron declaración en la PDI donde reconoció en fotos al asaltante. Menciona que su tía iba con su prima cuando la asaltaron a ella. También indicó que el día que lo asaltaron había ido al colegio, no recuerda la fecha, pero fue los primeros días del mes, por lo que al refrescársele la memoria recordó que fue el 01 de mayo y que ese día fue al colegio. Refiere que notó que el asaltante era extranjero el día del asalto y cuando recuperó su bicicleta, estaba amarrado de las manos a una reja y que cuando le robo la bicicleta se fue en ella. Reitera que cuando le robaron la bicicleta no le avisó a la policía.

En el mismo sentido a la declaración de los testigos civiles depusieron los funcionarios policiales **Víctor Morgado Araya** y **Milton Cancino Jeria**. El primero de ellos señaló en lo esencial que el 04 de mayo de 2025 fueron derivados por CENCO al ingreso de las tomas de Juan Richi, Colonias Extranjeras por un procedimiento por robo donde había dos víctimas y que recuperaron un teléfono y una bicicleta, además, había un detenido por las víctimas. Señala que se informó a la fiscalía el delito de receptación. Las víctimas eran Carlos Ñancumil que había sido asaltado el 01 de mayo de 2025 en un parque de Colonias Extranjeras y María Ñancumil que fue



asaltada el 29 de abril de 2025 cuando iba al domicilio le sustrajeron con arma blanca el celular marca Samsung. Agregó que encontraron al imputado en el ingreso de los tomas atado a un cierre perimetral y las especies se reconocieron por las víctimas y las fijaron fotográficamente, la bicicleta estaba al lado del imputado y el teléfono lo portaba el acusado, se lo encontraron al revisarle las vestimentas, así que lo detuvieron por receptación, así se hizo el parte policial, además, se confeccionó Acta de reconocimiento simple por ambas víctimas, quienes lo reconocen por las vestimentas y sus características. Al detenido lo llevaron a constatar lesiones, resultando sin lesiones, y se le dieron a conocer sus derechos, el sujeto alegó inocencia. Agregó que el imputado estaba sujeto de una mano con una cuerda al cerco perimetral, no lo detuvieron las víctimas, pero cuando Carabineros llegó estaban ahí las víctimas, los que detuvieron se lo entregaron a las víctimas y Carabineros revisó las vestimentas del acusado, no sabe si antes lo habían registrado. Al refrescársele memoria recordó que los vecinos lo revisaron, ven la especie y la dejan ahí mismo hasta que ellos encuentran el celular. Menciona que no había denuncia previa y por eso el parte se hizo por receptación, por no haber flagrancia del robo y el reconocimiento es posterior a la detención. Mientras que **Milton Cancino Jeria**, principalmente, mencionó que el 04 de mayo de 2025 hubo un procedimiento de Carabineros en que ciudadanos retuvieron a un colombiano por ser el autor de dos robos, encargándoseles a ellos como PDI ubicar a las dos víctimas de dos robos distintos, tomarles declaración y efectuar reconocimiento fotográfico. El testigo le tomó declaración a Carlos Ñancumil, quien mientras estaba en una plazoleta de Colonias Extranjeras fue abordado por un colombiano que le pregunta por su bicicleta, se torna agresivo, al parecer drogado, y lo intimida con un cuchillo, le roba la bicicleta y también quería robarle el teléfono, pero la víctima logra arrancar. Al realizarle reconocimiento fotográfico, el ofendido identificó como su asaltante al acusado. Además, en la conclusión del informe policial se indica que el acusado participó en ambos robos porque la otra víctima también lo reconoció como autor de su asalto. Consigna que no existía denuncia antes



de la detención ciudadana y que los robos fueron el 29 y el 01 de mayo día del trabajador.

Durante la declaración de Víctor Morgado Araya se le exhibió el **set fotográfico** señalando que la fotografía 1 corresponde al parque donde fue cometido el robo de la bicicleta; no reconoce la fotografía 2; la fotografía 3 muestra la vestimenta del imputado cuando fue retenido, imputado; las fotografías 4 y 5 corresponden al teléfono sustraído a María Ñancumil; la fotografías 6 muestra la bicicleta sustraída a Carlos Ñancumil; y la fotografía 7 es el imputado que él reconoce en la sala de audiencias.

I. Respecto al Hecho N° 1

OCTAVO: Hecho acreditado y sus fundamentos. Que, conforme con lo que se viene razonando, de la prueba rendida se puede concluir por estos sentenciadores, más allá de toda duda razonable, que: *“el 29 de abril de 2025, alrededor de las 14.40 horas aproximadamente, en las inmediaciones de la calle Gabriel Marco Ivanne, en la ciudad de Copiapó, el acusado JOHN HAROLD GODOY VALENCIA abordó a la víctima María Ñancumil Vera, extrayendo desde sus vestimentas un cuchillo, con el que intimidó a la víctima amenazándola con apuñalarla si ésta no le entregaba su teléfono celular, tras lo cual el inculcado le arrebató de sus manos a la afectada el celular marca Samsung, color rojo, huyendo el enjuiciado con la especie en su poder.”*

A dicha conclusión se arribó considerando que tanto la víctima como su hija, quienes son testigos presenciales de lo ocurrido, aportaron información suficiente para deducir que los hechos acontecieron el 29 de abril de 2025, a eso de las 14.40 horas, cuando éstas se dirigían al colegio en busca de los hijos y hermanos de las testigos respectivamente. También la hija de la ofendida fue clara en consignar que este episodio sucede en calle Gabriel Marco Ivanne de esta ciudad. Del mismo modo, estas deponentes relatan de forma similar la dinámica de lo acontecido señalando que un sujeto las adelantó en su trayecto, trató de generarles confianza diciéndoles que no se preocuparan porque no era una mala persona y unos instantes posteriores regresa a su encuentro para extraer desde sus vestimentas un cuchillo y exigirle a la afectada la entrega de su teléfono celular, pues de lo contrario la apuñalaría con el arma que ambas víctimas vieron, asimismo,



fueron contestes en la circunstancia que aquel sujeto le arrebató a la víctima el teléfono celular que ella tenía en sus manos y se fue del lugar con dicho aparato entre murmullos. A su vez, tanto la víctima como el funcionario de Carabineros que testificó en el juicio aportaron información sobre la marca del teléfono celular de la víctima, indicando esta última, además, el color del dispositivo en cuestión.

Lo anterior es concordante con los dichos del testigo Morgado Araya quien confirmó durante su declaración los dichos de las dos testigos civiles dando cuenta sobre la identidad de la víctima, la fecha de ocurrencia del hecho, el lugar donde esto acontece y la especie que le fue sustraída.

Por lo anterior, tratándose de testigos contestes tanto en el hecho como en sus circunstancias esenciales, sin que exista mayor contradicción entre sí o con otras pruebas aportadas al juicio, es que estos jueces pueden establecer el hecho que se tuvo por acreditado en los términos que se dieron por asentados con base a las motivaciones que se han previamente expresado.

NOVENO: Calificación jurídica. Que los hechos descritos precedentemente constituyen, de acuerdo a su calificación jurídica, un **delito de robo con intimidación en las personas**, previsto en el artículo 432 y sancionado en el artículo 436 inciso 1°, ambos, del Código Penal, en relación al artículo 439 del mismo cuerpo legal, en grado de desarrollo **consumado** conforme a lo dispuesto en el artículo 7° del Código Penal, teniendo para ello presente que el referido ilícito exige para su configuración la apropiación por medios materiales y mediante actos de amedrentamiento o violencia ejercidos sobre las personas, de bienes muebles ajenos, con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño, elementos del tipo que resultaron plenamente acreditados con la prueba rendida por el órgano persecutor penal, pues la acción de amedrentar a la víctima con un cuchillo para que hiciese entrega de la especie mueble que portaba consigo y no se opusiese a la aprehensión de la misma por parte del ejecutor, impidiéndole así oponer resistencia y mermando sus posibilidades de defensa, constituye una especie de amenaza ejercida con la finalidad de que la afectada hiciese entrega de la cosa e impedir que ella se resista u oponga a que le sea la misma especie



arrebatada, las cuales configuran el tipo de intimidación que exige el tipo penal, conforme lo entiende el legislador en el artículo 439 del Código Penal al ser un medio para provocar la manifestación o entrega de lo que se sustrae disminuyéndole su capacidad de resistencia u oposición al ilícito, cumpliéndose así el nexo subjetivo entre la realización de la intimidación y la apropiación misma de la especie que le fue sustraída a la víctima, con la cual en los hechos, anulando las posibilidades de la ofendida para repeler el ataque que sufrió, le permitieron al hechor apoderarse del teléfono celular de María Ñancumil Vera, especie que por su naturaleza tiene el carácter de cosa mueble, la cual no le pertenecía al agente perpetrador, por lo tanto, resultaba ajena, ya que todos los testigos que declararon sobre este punto refirieron que el mencionado dispositivo electrónico era de propiedad o estaba en posesión de la víctima a la que le fue arrebatado, siendo dicho asimiento contra la voluntad de quien lo portaba o tenía bajo su esfera de resguardo, pretendiendo el sujeto que obró en contra de la víctima obtener un provecho económico ilícito con su actuar, por lo que no cabe más que concluir que el episodio descrito precedentemente configura el delito de robo con intimidación en las personas descrito en el artículo 432 del Código Penal, el cual se sanciona en el artículo 436 inciso 1° del mismo cuerpo punitivo y que, al haberse arrebatado la especie y sacado la misma de la esfera de resguardo de su titular, alcanzó dicho delito el grado de consumado.

II. Respecto al Hecho N° 2

DÉCIMO: Hecho acreditado y sus fundamentos. Que, conforme con lo que se viene razonando, de la prueba rendida se puede concluir por estos sentenciadores, más allá de toda duda razonable, que: *“el 01 de mayo de 2025, alrededor de las 19.00 horas, en una plazoleta ubicada en el sector Colonias Extranjeras, en la comuna de Copiapó, el acusado JOHN HAROLD GODOY VALENCIA abordó a la víctima Carlos Ñancumil Ñancumil y extrajo desde sus vestimentas un cuchillo, con el cual intimidó al ofendido, amenazándolo con apuñalarlo si no le entregaba la bicicleta, por lo que la víctima accedió a dicha entrega ante el temor de ser agredido, logrando de este modo el enjuiciado sustraerle la bicicleta y huyó del lugar con la especie en su poder.”*



Para dicha conclusión se tiene en consideración que el propio ofendido que declaró como testigo en el juicio dio cuenta que los acontecimientos se desarrollaron el 01 de mayo de 2025 cuando eran las 7 y tanto de la noche mientras estaba en un parque o plazoleta del sector de Colonias Extranjeras, de la ciudad de Copiapó, donde había parado para descansar luego de haber andado en bicicleta, siendo abordado en ese instante por un sujeto con el que estuvo conversando sobre la referida bicicleta, quien momentos más tarde le exhibió un cuchillo que saco de entre sus ropas para intimidarlo amenazándolo con causarle daño con dicha arma blanca si no le entregaba las especies que llevaba consigo haciendo entrega únicamente de la bicicleta y huyendo con su billetera y teléfono, mientras el perpetrador se retiró con la bicicleta en su poder llevándosela consigo. Esta versión fue confirmada por los dichos del testigo policial Cancino Jeria, quien reprodujo la declaración policial de la víctima en términos muy similares a como el mismo ofendido lo hizo en el tribunal refiriendo que vivía en el sector de Colonias Extranjeras desde donde bajó en bicicleta y se detuvo en una plazoleta que había ahí donde un sujeto colombiano le preguntó por su bicicleta tornándose agresivo instantes más tarde y lo intimida con un cuchillo consiguiendo robarle la bicicleta y no las demás especies que también quería sustraerle porque el ofendido logró huir.

Ambas declaraciones también coinciden con los dichos de María Ñancumil que explica que días después de haber sido asaltada también lo fue su sobrino Carlos Ñancumil a quien le robaron una bicicleta, cuestión que reiteró la testigo Paz Manque.

Es por ello que, tratándose de testigos que resultan contestes tanto en lo sustancial del hecho como en sus circunstancias esenciales, sin que en sus dichos se advierta contradicciones internas o con otras pruebas aportadas al juicio, que estos jueces dan credibilidad a sus relatos y, en consecuencia, tienen por acreditado el hecho N° 2 en los términos que se dieron por establecidos.

UNDÉCIMO: Calificación jurídica. Que los hechos en el considerando que antecede configuran un **delito de robo con intimidación en las personas**, previsto en el artículo 432 y sancionado en el artículo 436 inciso



1°, ambos, del Código Penal, en relación al artículo 439 del mismo cuerpo legal, en grado de desarrollo **consumado** conforme a lo dispuesto en el artículo 7° del Código Penal, teniendo para ello presente que el referido ilícito exige para su configuración la apropiación por medios materiales y mediante actos de amedrentamiento o violencia ejercidos sobre las personas, de bienes muebles ajenos, con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño, elementos del tipo que resultaron plenamente acreditados con la prueba rendida por el órgano persecutor penal, pues la acción de amedrentar a la víctima con un cuchillo para que hiciese entrega de la especie mueble que tenía consigo, mermando con ello sus posibilidades de defensa, constituye una amenaza para hacer que se entregue la especie e impide la resistencia u oposición a que le sea arrebatada, las cuales configuran el tipo de intimidación que exige el tipo penal, conforme lo entiende el legislador en el artículo 439 del Código Penal al ser un medio para provocar la manifestación o entrega de lo que se sustrae disminuyéndole su capacidad de resistencia u oposición al ilícito, cumpliéndose así el nexo subjetivo entre la realización de la intimidación y la apropiación misma de la especie que le fue sustraída al ofendido, con la cual en los hechos, anulando las posibilidades del afectado para repeler el ataque que sufrió, le permitieron al hechor apoderarse de la bicicleta de Carlos Ñancumil Ñancumil, especie que por su naturaleza tiene el carácter de cosa mueble, la cual no le pertenecía al agente perpetrador, por lo tanto, resultaba ajena, ya que todos los testigos que declararon sobre este punto refirieron que el mencionado medio de transporte era de propiedad o estaba en posesión de la víctima a la que le fue arrebatado, siendo dicho asimiento contra la voluntad de quien lo portaba o tenía bajo su esfera de resguardo, pretendiendo el sujeto que obró en contra del ofendido obtener un provecho económico ilícito con su actuar, por lo que no cabe más que concluir que el episodio descrito precedentemente configura el delito de robo con intimidación en las personas descrito en el artículo 432 del Código Penal, el cual se sanciona en el artículo 436 inciso 1° del mismo cuerpo punitivo y que, al haberse arrebatado la especie y sacado la misma de la esfera de resguardo de su titular, alcanzó dicho delito el grado de consumado.



DUODÉCIMO: Participación. Que en cuanto a la participación del acusado en los ilícitos que le fueron imputados se tiene en cuenta que al efecto se cuenta con el reconocimiento expreso de todos los testigos que reconocieron al encartado como el autor de los delitos que afectaron a las víctimas, quienes, además, dan cuenta de la forma en que éste ejecutó la perpetración de los hechos y el rol que asumió en los mismos, así como la conducta posterior a los mismos, sumado al hecho que la descripción del inculpado que hicieron resulta concordante con la apariencia física que el tribunal pudo apreciar por sí mismo en la sala de audiencia a través de la inmediatez, sumado a que la víctima del primer episodio fue clara al referir la indumentaria con que andaba vestido el enjuiciado el día que la asaltaron y explicó que eran las mismas ropas que vestía cuando fue detenido y le restituyeron su teléfono, es más, esa misma afectada precisó el detalle del gorrito que llevaba el día en que le arrebató a ella su equipo celular y que no tenía el día que ella lo recuperó, elemento que coincide con los dichos de la segunda víctima que también da cuenta que el sujeto portaba un gorro de lana el día que le quitó su bicicleta. Además, el acusado fue reconocido en Actas de reconocimiento y en Kardex fotográfico ante la policía, explicando los testigos las circunstancias que dieron las víctimas para justificar su reconocimiento explicando que dicha sindicación la fundan en las vestimentas y las características del sujeto que resultan coincidentes con las del inculpado, siendo irrelevante el hecho que dicho reconocimiento sea posterior a la detención porque ambos hechos carecen de una vinculación necesaria e inseparable pudiendo las dos circunstancias subsistir una de manera independiente a la otra, cuestión que queda demostrada con el reconocimiento que efectúa Paz Manque Ñancumil considerando que ella no asistió al lugar donde fue detenido el sujeto y la única vez anterior que los vio anterior al reconocimiento que hizo en la sala de audiencia fue cuando el sujeto asaltó a su madre mientras ella le acompañaba y por ello no se puede sostener que la detención influenció el reconocimiento efectuado, descartándose así la alegación de la defensa en orden a que los reconocimientos serían sesgados.



Además, en los testimonios recibidos en el juicio no se advirtió animosidad para con el acusado de parte de los testigos, tampoco se apreció alguna ganancia secundaria con sus declaraciones, por lo que no se les puede quitar mérito a sus asertos erigiéndose como prueba suficiente para justificar las conclusiones que se alcanzaron por el tribunal.

Por lo anterior, no cabe duda sobre la identidad de quien intervino en los hechos y por lo tanto su participación está debidamente comprobada, siendo éste el autor material de los dos ilícitos que se dieron por acreditados en los considerandos previos.

DECIMOTERCERO: Prueba desestimada. Que, atendido que el objeto del juicio consistió en la apropiación mediante intimidación de especies muebles ajenas por parte del acusado, no toda la prueba rendida resultó de relevancia para acreditar los hechos debatidos por encontrarse esos antecedentes probatorios desvinculados con el objeto del juicio ya que versan sobre cuestiones anexas, periféricas e irrelevantes para la decisión del asunto, o bien, son sobreabundantes en la demostración de los hechos que se alcanzó con mejor prueba que aquellas que se deben desestimar por estas razones. Es por ello que, en consideración a los motivos previamente explicados, se desestiman las fotografías aportadas en el juicio porque su contenido únicamente reitera lo expuesto por los testigos que declararon sobre los hechos, así también se desestiman los dichos de Víctor Morgado Araya, solamente en aquella parte en que se refiere a la detención del enjuiciado y la prueba que de aquella diligencia se obtuvo, no así respecto de lo declarado por las víctimas sobre los hechos que les afectaron días anteriores y los reconocimientos efectuados, por ser circunstancias diversas e independientes entre sí la detención y los hechos objeto de este juicio.

DECIMOCUARTO: Alegaciones de las defensas. Que, la defensa sostuvo sus alegaciones de absolución basadas en una supuesta vulneración de garantías fundamentales ocurridas al momento de la detención del acusado y por tanto carecerían de valor las pruebas obtenidas cuyo origen se encuentra en la referida actuación. Sin embargo, cabe señalar que en este caso puntual no se advierte vulneración de garantías fundamentales que incidan en el resultado del juicio, teniendo presente que aquella situación es



de conocimiento del Juzgado de Garantía competente si es que resulta efectivo lo que sostuvo la defensa en orden a que aquello se ha reclamado en todas las oportunidades procesales por lo que dicho tribunal previamente ya conoció del asunto y declaró la legalidad de la detención, tratándose de un asunto resuelto judicialmente y dotado de las características que confiere la cosa juzgada. Además, incluso en el evento que se considerase tardíamente que en la detención ciudadana del acusado hubo vulneración de garantías fundamentales, aquella no contamina ni invalida la prueba aportada en el juicio, pues, como ya se explicó, las probanzas con las que el tribunal se formó convicción no tiene su origen en la detención ni versan sobre aquella, si no que las pruebas provienen de los hechos mismos que conforman el objeto del juicio, el cual es independiente y separado de la detención que es una circunstancia posterior y ajena a la comisión de los hechos y la participación del acusado en los mismos y por lo tanto no se configura lo que en doctrina se conoce como la teoría del fruto del árbol envenenado por la escisión que existe entre las pruebas provenientes de la detención que alega la defensa y las pruebas que nacen en la comisión de los ilícitos por los cuales será castigado el encartado resultando intrascendente la alegación de la defensa sobre la existencia de vulneración de derechos fundamentales.

En cuanto a sus pretensiones sobre el hecho que no habría hipótesis de flagrancia y que con la detención se vulneraron los artículos 5, 129 y 130 del Código Procesal Penal que la regulan, como ya se dijo, la situación de flagrancia incide únicamente en la detención, pero no es transmitible a la prueba cuyo origen se encuentra en los hechos mismos, por lo que debe de igual manera desatenderse aquel postulado.

Por todo lo anterior es que tampoco se puede acceder a la aspiración de valorar negativamente la prueba porque no se configuró la hipótesis de que ésta proviniese de diligencias ilegales tal como ya se explicó en las líneas precedentes.

Sobre las circunstancias que el sujeto habría sido registrado por civiles con anterioridad a la revisión policial y que las especies le habrían sido introducidas por terceros, lo cierto es que aquello es una cuestión ajena al objeto del juicio considerando que la consumación del delito de robo se



produce con la extracción de las especies desde la esfera de resguardo de su legítimo tenedor y no es exigencia del tipo penal que las especies se hallen en poder del acusado, más aún si la participación no se dedujo que aquella circunstancia, por lo que no existe la supuesta duda razonable que postula la defensa, pues efectivamente sí hay antecedentes anteriores que vinculan al enjuiciado con los delitos de la forma en que se analizó en su oportunidad. Mientras que respecto a la inexistencia de denuncia previa se debe señalar que aquella no es obstáculo para que las víctimas puedan efectuarla cuando estimen conveniente realizarla pues nada las obliga a hacerla en el mismo instante que sufren el ilícito por lo que aquello en nada afecta la investigación ni mucho menos la prueba rendida en juicio que para este tribunal resulto bastante para alcanzar la convicción a la que arribó.

Asimismo, se trata de asuntos periféricos que no tienen la entidad suficiente para desvirtuar la prueba el que no se haya previamente mencionado el nombre de la persona que comunicó a su comunidad la ocurrencia de los asaltos ni se sepa si el día de ocurrencia era festivo o no, porque tales imprecisiones no afectan el núcleo factico que fue de conocimiento del tribunal ni demuestran falsedad en los testimonios que fueron ponderados por estos sentenciadores. Del mismo modo, el que no se acompañe prueba sobre las publicaciones en redes sociales de los hechos ocurridos incide en el resultado del juicio considerando la libertad probatoria que rige en materia penal, resultando suficiente para demostrar esa situación los dichos de los testigos.

Es por estas consideraciones que se desestiman las alegaciones efectuadas por la defensa a lo largo del juicio.

DECIMOQUINTO: Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Que, en la etapa procesal correspondiente, luego de comunicada la deliberación del tribunal, se acompañó extracto de filiación del enjuiciado donde no registra anotaciones penales previas, documento en base al cual la fiscalía y la defensa solicitaron el reconocimiento de la atenuante de irreprochable conducta anterior de acuerdo al artículo 11 N° 6 del Código Penal y, además, la defensa pidió que se le tuviera como muy calificada en los términos del artículo 68 ter del mismo cuerpo punitivo.



Ante dichas alegaciones el tribunal tiene presente que el documento que se acompañó por el ministerio público resulta insuficiente para sostener las pretensiones de ambas partes, pues la irreprochabilidad de la conducta que exige el **artículo 11 N° 6 del Código Penal**, ha sido entendida en un aspecto negativo, que dice relación con que el sujeto no haya sido condenado penalmente en el pasado, y que no haya incurrido en transgresiones al ordenamiento jurídico, antes de la comisión del delito, y otro de orden positivo, consistente en que haya observado un comportamiento ético-social adecuado con sus semejantes, por lo que la atenuante alegada requiere de quien la pide, su debida comprobación, atentos a la norma básica de cargas procesales probatorias contenida en el artículo 1698 del Código Civil. Por ello, quien la solicita era quien debía aportar los antecedentes que permitieran su comprobación, toda vez que el tribunal no puede resolver únicamente con los meros dichos de las partes. Ahora bien, lo que se debe acreditar es que el sujeto en cuestión, respecto del cual se pide su reconocimiento, no ha tenido conductas punibles o refractarias con anterioridad al hecho ilícito por el cual se le juzga y que en el caso de las personas de nacionalidad extranjera debieran necesariamente allegar a lo menos el documento auténtico o público que haga las veces de certificado de extracto y filiación chileno, emanado desde el país de origen o cualquier elemento de convicción que lo sustituya apropiadamente que permitiera conocer la conducta del encartado con anterioridad a su ingreso a Chile y, de esa manera, tomar conocimiento cabal y debido de su historia vital que permitiera concluir que efectivamente ha sido irreprochables, más todavía si no se demostró su situación migratoria, estando lo anterior en la línea de que el reconocimiento de la concurrencia de las atenuantes es algo privativo del tribunal del grado, como así lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en el Rol N°26.205-2023, al sostener en el motivo décimo sexto que: *“La determinación de la concurrencia o no de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal constituye una labor privativa del órgano jurisdiccional cuya decisión se concreta en el fallo”*, criterio que fue reproducido por la Iltrma. Corte de Apelaciones de Copiapó en el séptimo considerando del fallo dictado en el **Ingreso Corte N° 481-2023** al sostener que la exigencia legal



*“para que la atenuante en estudio se configure, es una conducta anterior al hecho punible que esté carente de reproches, lo que, por cierto, es un asunto fáctico, y por tanto materia de prueba. Ello es evidente ya que no puede estimarse la existencia de una presunción legal en cuanto a que una persona que es condenada ostenta una conducta anterior carente de reproches”, es decir, siendo un elemento de hecho requiere de prueba para su concurrencia y aceptación por parte de los juzgadores, señalando, además, en el considerando octavo del citado fallo que dicha exigencia de prueba no importa inversión del *onus probandi*, pues respecto de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal ajenas al juicio no están cubiertas por la presunción de inocencia y respecto de las cuales debe recaer prueba, tal como lo plantean los profesores Flavia Carbonell Bellolio y Jonatan Valenzuela Saldias, (Bellolio, Flavia Carbonell, & Saldias, Jonatan Valenzuela (2021). “La prueba de la inocencia y las defensas probatorias: el caso de la revisión”, Revista Chilena de Derecho, 48(1), 55-80), quienes postulan que “dos de los pilares fundamentales del proceso penal son el principio acusatorio y el principio de culpabilidad. En términos simplificados, corresponde al ente persecutorio probar la culpabilidad del imputado y si el tribunal estima que se ha superado el estándar probatorio “más allá de toda duda razonable”, dictará sentencia condenatoria para sancionar a la persona culpable. A la hipótesis acusatoria de culpabilidad se suma una hipótesis defensiva que, a diferencia de aquella, puede adoptar distintas modalidades: a) la negación de los hechos de la acusación; b) la aceptación de los hechos de la acusación pero cuestionando su calificación jurídica; c) la aceptación de los hechos de la acusación y de su calificación jurídica, pero incluyendo circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal (atenuantes y/o eximentes); d) la alegación directa de la inocencia del imputado o acusado, incompatible con la hipótesis acusatoria. Todas ellas son mecanismos defensivos que pueden desplegarse fundamentalmente en el juicio oral, durante la tramitación del recurso de nulidad o en la acción de revisión. Los dos últimos requieren, desde el punto de vista procesal, de actividad probatoria por parte de la defensa en juicio”, por ello resulta necesario para que el tribunal tenga por configurada una atenuante que se aporte prueba suficiente de su concurrencia, sin*



embargo, al momento de formularse la alegación de una conducta irreprochable del sujeto pasivo de la acción penal, no se aportó antecedentes que la justifiquen y del documento que proporcionó el ministerio público no se puede desprender la fecha en que en el condenado ingresó a Chile ni el tiempo que pueda llevar residiendo de manera regular en el país, sin que se cuente con otros elementos de corroboración de aquello, por lo que no se le puede dar valor alguno a tal aseveración de conducta irreprochable, debido a que tampoco se presentaron los debidos antecedentes de su país de origen de los cuales estos sentenciadores pudieran comprobar que su conducta vital ha sido exenta de todo reproche que permita tener por configurada la atenuante invocada. Por lo anterior, ante la ausencia de antecedentes probatorios suficientes, no es posible concluir que el acusado ha mantenido durante su histórico vital, una conducta libre de todo reproche penal, cuestión que impide configurar la atenuante solicitada.

Al no haberse configurado la atenuante alegada, tampoco es posible declarar la procedencia del **artículo 68 ter del Código Penal**, toda vez que no existen circunstancia atenuante alguna que pueda ser calificada en dicha categoría normativa.

DECIMOSEXTO: Determinación de pena. Que, habiéndosele encontrado culpable al acusado de dos delitos consumados de robo con intimidación en las personas, el artículo 351 inciso final del Código Procesal Penal dispone que se debe entender como delitos de la misma especie aquellos que afectan el mismo bien jurídico. Al efecto, cabe señalar que estamos en presencia de dos episodios que por separado configuran un delito contra la propiedad donde se compromete, además, la autodeterminación de la víctima con la amenaza del acaecimiento de un mal sobre su corporalidad si no condiciona su actuar a la perpetración del delito, que por sí constituye una lesión a su integridad psíquica, aunque sea transitoria, por lo que se está en presencia de hechos que afectan los mismos bienes jurídicos resguardados por la legislación, lo que se evidencia incluso a que ambos delitos están tipificados en el mismo artículo 432 primera parte del Código Penal y sancionados con igual pena en el artículo 436 inciso 1° del mismo cuerpo legal, siendo más aún definida la violencia o intimidación por el



mismo precepto legal, que como se dijo es el artículo 439 del citado Código, por lo que no queda más que concluir que estamos en la hipótesis del artículo 351 inciso 1° del Código Procesal Penal.

En ese mismo sentido fueron las alegaciones de las partes cuando debatieron sobre la pena que solicitaban que le fuese impuesta al a esas alturas condenado durante la audiencia que contempla el artículo 343 del Código Procesal Penal, teniendo en consideración que el marco legal contemplado por el legislador para cada uno de los ilícitos que se comprobaron según el artículo 436 inciso 1° del Código Penal, en abstracto, es de presidio mayor en sus grados mínimo a máximo, dentro del cual el tribunal debiera fijar el quantum efectivo de la pena conforme a la regla primera del artículo 449 del mismo cuerpo legal y que, estos sentenciadores, tienen en consideración que no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que deban ponderarse, sumado a que la extensión del mal causado no resulta suficiente para incrementar mayormente la duración de la pena privativa de libertad, por lo que en la hipótesis más beneficiosa para el acusado en ese entendido sería la imposición de una pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por cada uno de los episodios por los cuales resultó condenado, por lo que en ese evento, de aplicarse el artículo 74 del Código Penal debiera permanecer privado de libertad en total diez años dos días, situación que hace más favorable para el encartado la aplicación de la regla del artículo 351 inciso 1° del Código Procesal Penal que obliga al tribunal a tratar los delitos cometidos como si fuesen uno sólo y aumentar el marco penal posible en uno o dos grados, por lo que en este caso el incremento el tribunal lo hará en un solo grado, quedando el marco penal en abstracto circunscrito a presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo (simple), pero como se dijo, la extensión del daño ocasionado no tiene la envergadura suficiente para exacerbar mayormente la pena por lo que finalmente se impondrá aquel quantum que se indicará en lo resolutivo del fallo, por estimar los jueces que ella es la más justa y proporcional al injusto de los delitos perpetrados, pena que por su envergadura hace imposible la sustitución por una pena alternativa contemplada en la **Ley 18.216**, por lo que su cumplimiento será efectivo,



reconociéndosele como abono a su ejecución el tiempo que el sentenciado ha permanecido privado de libertad conforme lo consignado en el auto de apertura y el certificado emitido por el jefe de causas de este tribunal.

Por otro lado, en lo que dice relación con las demás accesorias que se deben imponer por expreso mandato legal, en especial la incorporación de la **huella genética** en el registro de condenados, éstas serán del mismo modo impuestas por expreso mandato legal en lo decisorio del fallo.

DECIMOSÉPTIMO: Costas. Que conforme a lo previsto en el artículo 24 del Código Penal, se entiende que toda sentencia condenatoria lleva envuelta la obligación del penado de asumir las costas de la causa, sin embargo, el artículo 47 inciso final del Código Procesal Penal permite al tribunal eximir al condenado del pago de las costas cuando considere que existe un motivo justificado, el cual estos juzgadores entienden que no se encuentra en alguna de las hipótesis que para este tribunal constituya justificación suficiente para la liberación del pago de las costas, por lo que le serán impuestas por ser éstas procedentes con base en las razones y fundamentos legales señalados.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 14 N° 1, 15 N° 1, 24, 25, 28, 50, 74, 76, 432, 436, 439 y 449 del Código Penal; Ley 18.216, artículos 5 y 17 de la Ley 19.970, artículos 295, 296, 297, 340, 341, 342, 344, 346, 348 y 351 del Código Procesal Penal y demás normas legales pertinentes, se declara:

I.- Que se **condena**, por unanimidad, a **JOHN HAROLD GODOY VALENCIA, Cedula de Identidad N° 14.961.681-0**, ya individualizado en autos, a la pena de **DIEZ (10) AÑOS Y UN (1) DÍA** de presidio mayor en su grado medio y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor de dos delitos de **robo con intimidación en las personas**, descrito en el artículo 432 y 439 y sancionado en el artículo 436 del Código Penal, en grado de desarrollo **consumados**, cometidos el 29 de abril y 01 de mayo de 2025, en la comuna de Copiapó.



II.- Que, no reuniéndose en la especie los requisitos exigidos por la Ley N° 18.216 para la concesión de una pena sustitutiva, la pena privativa de libertad impuesta al condenado deberá ser de cumplimiento efectivo, sirviéndoles de abono los doscientos cincuenta y seis (256) días que ha permanecido privado de libertad en razón de esta causa, según se lee en el respectivo auto de apertura de juicio y en el certificado emitido por el Jefe de Unidad de Causas de este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, sin perjuicio de los demás días de abono que puedan haberse generado con posterioridad a la certificación aludida.

III.- Que, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5 y 17 de la Ley 19.970, se instruye a Gendarmería de Chile con el objeto que coordine con el Servicio Médico Legal y proceda, previa toma de muestras biológicas si fuere necesario, a la determinación de la huella genética del sentenciado y su incorporación al Registro de Condenados.

IV.- Que se condena en costas al penado.

Hágase devolución al Ministerio Público de los antecedentes incorporados legalmente por dicho persecutor penal en esta causa.

En su oportunidad y ejecutoriada que sea la presente sentencia, oficiése al Juzgado de Garantía de Copiapó, remitiéndosele copia íntegra y autorizada de la misma con su correspondiente certificado de ejecutoria, a objeto de dar cumplimiento a lo resuelto en ésta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 113 del Código Orgánico de Tribunales.

Téngase por notificados a los intervinientes y al sentenciado en la presente audiencia.

Redactada por el juez señor Adrián Reyes Pardo.

Regístrese y dese copia a las partes, remitiéndosele ésta a sus respectivos correos electrónicos.

RUC N° 2500604542-4

RIT N° 184 – 2025



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WCLXBRBMNDM

Pronunciado por la Tercera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, integrada por los Jueces señores **Marcelo Martínez Venegas**, quien la presidió, **Mauricio Pizarro Díaz** y **Adrián Reyes Pardo**. No firman la presente sentencia, a pesar de haber intervenido en la audiencia de juicio y concurrido al fallo los señores Martínez Venegas y Pizarro Díaz por encontrarse haciendo uso de su feriado legal.

